

Colombia, una guerra que se eterniza



Breve recuento histórico de las causas y desarrollo de la guerra irregular que desangra a Colombia

Sancho García

1. Introducción

Sobre Colombia, un país con aproximadamente 40 millones de habitantes y un enfrentamiento armado interno que lleva más de 50 años de fuego continuo, es poco lo que se escucha en telediarios, tanto en el ámbito europeo, en general, como en el español, en particular. Curiosamente, la situación de uno de los sitios más peligrosos del mundo – que suma a diario decenas de muertes en episodios violentos, tanto por acciones de guerra como por la intervención de las mafias del narcotráfico, teniendo como víctimas casi siempre a las franjas más desfavorecidas de la población civil – pasa de forma casi desapercibida respecto a conflictos más cercanos geográficamente o con mayor carga simbólica para las sociedades occidentales; esto aun a pesar de la conocida preferencia de sus medios informativos por los hechos traumáticos o sangrientos. Tal circunstancia puede deberse, entre otras cosas, a una especie de desgaste o acostumbamiento: la aparente monotonía de una guerra que, a ojos externos, se estanca, perpetúa y, a pesar de su brutalidad, no pone en riesgo, a corto plazo, intereses estratégicos de las economías desarrolladas – ni siquiera para los mismos EEUU, los que, aplicando sus métodos de guerra de baja intensidad, mantienen una situación larvada pero estable –. Lo irónico es que, a pesar de la realidad,

tal deriva hacia la costumbre no se percibe sólo en el exterior: la guerra interna colombiana ha llegado a un extremo de implantación en la sociedad tal que el gobierno actual (determinado a vencer militarmente a las guerrillas, particularmente a las FARC, de las que se ha declarado enemigo jurado) se ha empeñado en llevar adelante la delirante labor de negar su existencia.

Durante décadas, las alusiones oficiales y extraoficiales a las acciones de confrontación directa entre las fuerzas del estado y la insurgencia se hacían en torno al viejo eufemismo de “conflicto armado”. Este tenía por finalidad esconder la crudeza de una situación de guerra abierta entre dos facciones bien definidas y con estructura y mando militar claramente delimitado: las guerrillas constituidas alrededor de ideologías de izquierda (algunas como continuación histórica de viejas luchas populares organizadas) y las instituciones armadas de un estado controlado por elites económicas y políticas profundamente conservadoras. Estas elites perfectamente demarcadas y su existencia y afianzamiento tienen una fuerte correlación con la presencia de tres factores íntimamente relacionados y retroalimentados: lo profundamente excluyente del sistema productivo colombiano, su postración por la dominación directa (política y económica) de los EEUU y una sociedad que ha conservado por

generaciones un carácter prácticamente feudal (el que se percibe de forma más marcada a medida que el observador se aleja de los centros urbanos en dirección a las zonas rurales, pasando por los cinturones de miseria de las ciudades).

2. El problema de la tierra: carácter feudal de la sociedad colombiana

Dentro del cerrado círculo que conforman las clases dominantes en Colombia, la terrateniente es, por mucho, la más reaccionaria, la que mayor peso político tiene en suma y la que ha protagonizado, en defensa de sus intereses particulares, los mayores desmanes en la historia del país. Esta clase se ha enquistado en el sistema político (particularmente desde el aparato electoral), garantizando la estabilidad del poder central a través de un complejo sistema de clientelas en las que la pertenencia a un partido tradicional (Liberal o Conservador) venía siendo fundamental.

Los hacendados imperan, desde los mismos tiempos de la independencia, sobre enormes territorios de provincia, con casi los mismos privilegios de los señores feudales del medioevo europeo (si no más), como amos indiscutibles de las delegaciones del estado y de las instituciones regionales y locales. Esto es particularmente crítico en los latifundios de zonas como las sabanas de Córdoba y Sucre, propiedad de rancias familias costeñas y antioqueñas, así como los Llanos Orientales, con propietarios autóctonos o de otras regiones del país. La economía de estas regiones suele basarse en la ganadería extensiva, prácticamente desindustrializada y premoderna, que se solapa con extensos terrenos baldíos (propiedad de los mismos hacendados), en un desperdicio escandaloso de tierra cultivable que tiene como trasfondo la miseria de los millares de familias campesinas, carentes de tierra, generalmente alquiladas como jornaleros y aparceros de las grandes haciendas desde hace siglos.

Los políticos de cada región –que ejercen el poder a través de gobernaciones y alcaldías, concejos municipales y asambleas, así como la representación de la región en la capital a través de la llamada “Cámara de Representantes”–, suelen ser personajes caricaturescos que, al tener financiadas

sus campañas electorales desde las fortunas del terrateniente local, se ven obligados a comportarse como cortesanos al servicio de éste, acudiendo a su señor antes de tomar cualquier decisión. En algunos casos más recientes, los grandes propietarios prescinden de estos intermediarios y se lanzan directamente a la política local o nacional (Guerra Tulena, Guerra de la Espriella, Espinosa Facio-Lince, y un largo etc.). Es así como el saqueo de los fondos de la nación se institucionalizó a través de los llamados “auxilios parlamentarios a las regiones” (cuotas de dinero asignadas a congresistas para su ejecución en su región de origen, al libre albedrío del funcionario favorecido), lo que ha sido motivo de ironía en la crítica política del país y de intensas luchas por el reparto del jugoso pastel. Tales “auxilios” constituyen una de las principales formas de “pago” del poder central a los políticos de provincia, que previamente han comprado dichos favores aportando los votos necesarios para la elección de dichos parlamentarios¹.

Como es de esperarse, nunca estas “transferencias” redundan en el beneficio de las mayorías campesinas, sumidas en una pobreza sempiterna, casi existencial. La mayoría del campesinado vive en ghettos dispersos de tugurios rurales desprovistos de toda comodidad moderna, carente de propiedad sobre la tierra que trabaja. Algunos, descritos en un alarde de cinismo romántico como “andariegos”, viven en una especie de nomadismo, trabajando como recolectores en fincas semiindustriales de café o caña de azúcar, sin vivienda propia, sin arraigo de ningún tipo, de cuartel en cuartel, según sean las temporadas de cosecha. Otros se ocupan como jornaleros (asalariados rurales), ajenos a cualquier reglamentación laboral, sometidos a pagos de miseria diarios, calculados sobre lo arado o recogido; sobreexplotados y oprimidos, los jornaleros solían ser los principales emigrantes a las ciudades². Otro grupo es el de los aparceros, quienes reciben una

¹ A pesar de que formalmente han sido eliminados por reglamentación del congreso (tras lo aberrante que llegó a ser la situación durante los gobiernos de la última década), lo cierto es que se siguen repartiendo maquillados tras la figura de transferencias especiales, como recientemente sucedió con la representante Yidis Medina (Santander), quien recibió promesas de inversión para este departamento si cambiaba su voto negativo en el trámite de la reforma constitucional, en la comisión primera de la Cámara de Representantes (su voto era decisivo, pues había ventaja de uno a favor de archivar el proyecto). Algo menos le ofrecieron a Teodolindo Avendaño (Valle del Cauca) por quedarse en su oficina durante la votación.

parcela en alquiler, pagado en especie generalmente, para obtener un sustento de supervivencia, debiendo dedicar parte de ésta al cultivo de interés del dueño de la misma.

La desesperanza y la miseria que ha enfrentado el campesinado es el principal causante del progresivo incremento de la población urbana respecto a la rural. El fenómeno del desplazamiento de grandes masas de campesinos para engrosar los cinturones de miseria de las ciudades fue, durante mucho tiempo, un lento goteo de familias en búsqueda de las ilusorias oportunidades que ofrecía la ciudad. Sin embargo, el proceso se aceleró durante los terribles años de la década de 1950 (y sigue creciendo en este mismo momento). Para entonces, el dominio del partido Conservador – por medio de la coerción de terratenientes a sus “siervos” jornaleros, y aparceros y del control ideológico proveído por la iglesia católica sobre las masas campesinas sumidas en la ignorancia – era oprobioso. Esto propició, hacia finales de la década de 1940, la ascensión de un marcado descontento social, que era canalizado y capitalizado políticamente por el partido Liberal a través de las fervorosas arengas de un joven político de corte más o menos populista: Jorge Eliécer Gaitán. Proveniente de la clase media, con un discurso de tipo nacionalista e incendiario contra el régimen conservador y recién llegado de la turbulenta Italia de finales de la década de 1930, Gaitán se concentró en resumir alrededor suyo el clamor de las clases populares, lo que causó una creciente inquietud en la dirigencia conservadora y hasta en los líderes tradicionales de su propio partido.

² Uno de los primeros intentos de organización sindical en Colombia se dio a finales de la década de 1920, precisamente dentro del sector de los jornaleros, específicamente de los empleados de la infaustamente recordada multinacional frutera estadounidense “United Fruit Company” (aún existente, bajo otra denominación). Ante la huelga convocada por los trabajadores de esta multinacional, sus directivos ordenaron (literalmente) al gobierno nacional y al ejército destruir todo vestigio de organización obrera. La respuesta de los militares no se hizo esperar: entraron a la asamblea sindical disparando, con un resultado de cientos de trabajadores muertos, suceso que es conocido como “La masacre de las bananeras”. Ver: “*Los Inconformes*”. Ignacio Torres Giraldo, *Editorial Latina, Tomo No 3, Bogotá 1978*

3. La desindustrialización en las ciudades y el advenimiento de la economía informal

El asesinato de Gaitán en 1948 (en la que la participación de la CIA es un secreto a voces y se ha intentado investigar por personas y organizaciones independientes en varias ocasiones) desencadenó la ira de las masas pauperizadas (la mayoría de la población colombiana, entonces como ahora), dando lugar a levantamientos a lo largo y ancho del país, pero especialmente en la capital, donde dicha revuelta se dio a llamar “El Bogotazo”: edificios gubernamentales incendiados, ataques a medios de comunicación oficialistas, la desaparición del tranvía, saqueos, linchamientos... y la definitiva emigración de las clases altas del centro de Bogotá hacia zonas al norte de la ciudad, pronunciando aún más el contraste entre barrios ricos y pobres. Las zonas de producción industrial, precarias, anacrónicas y de productividad ínfima se entremezclaron con los barrios populares, que se iban pauperizando y deteriorando con el abandono de las administraciones de la ciudad, concentradas en financiar el esplendor de los ciudadelas de reciente creación para las familias adineradas.

Los reductos del liberalismo radical, adscrito a una burguesía nacional agonizante tras su derrota definitiva en la guerra de los mil días³, se vieron condenados a la extinción, fortaleciéndose una clase industrial perezosa en tanto en cuanto totalmente dependiente de la adquisición de máquinas herramientas y otros medios de producción de los EEUU. Como consecuencia, buena parte de esta burguesía se distorsionó hasta convertirse en una simple horda de comerciantes (importadores), que renunció a la producción directa de bienes manufacturados, concentrándose en la adquisición de productos elaborados desde las potencias extranjeras; paralelamente, su posición ideológica se iba haciendo cada vez más reaccionaria, al convertirse de competidores en aliados-dependientes de los capitales extranjeros. Una facción mucho más reducida permaneció en la producción semiindustrial

³ Guerra civil de 1899 a 1903, en la que los conservadores aseguraron su primacía tras la implantación de la constitución de 1886, de carácter fuertemente reaccionario, derrotando al ala izquierda del Partido Liberal en armas. Al finalizar, el país estaba en tal estado de depresión que no hubo la menor resistencia a la separación de Panamá por presión del gobierno estadounidense, por esas épocas, en plena construcción del canal interoceánico.

para el mercado urbano, concentrándose tanto en la producción de bienes de consumo inmediato (destinados a las clases populares, especialmente alimentos) como en la prestación servicios enfocados hacia los sectores más pudientes de la sociedad (lo que ha deformado aún más la industria nacional, ya que la inversión se dedica a financiar la producción de bienes de consumo **suntuario** que imitan los patrones de consumo de países industrializados). Estos grupos fueron concentrándose en oligopolios horizontales, un proceso cuya velocidad e intensidad se incrementaba gradualmente hasta establecerse la existencia de tan sólo dos macrotrusts (el grupo de Julio Mario Santo Domingo y el grupo de Carlos Ardila Lülle), enfrentados por el consumo interno en casi todas las ramas de la economía, desde el transporte aéreo hasta la producción de bebidas (cerveza el primero, refrescos y gaseosas el segundo), pasando por los medios de comunicación, la prestación de servicios financieros y bursátiles, etc., siempre alejados de cualquier producción industrial de valor agregado significativo. Es así como las exportaciones se fueron restringiendo cada vez más a las materias primas (herencia de la economía del siglo XIX, producto de la enfermedad holandesa), delegando de nuevo y definitivamente la actividad exportadora a los “industriales del agro”, ligados a la clase terrateniente, aplicándose esto incluso a los productos ilegales, como los narcóticos. Mientras tanto, los productos de mayor valor agregado son importados directamente de países industrializados o, en el mejor de los casos, ensamblados o producidos por plantas y factorías propiedad de multinacionales y transnacionales.

Esta suma de factores ha hecho que la economía colombiana carezca de cualquier esperanza de desarrollo industrial de tipo moderno; en un contexto tal, los profesionales generados por el sistema educativo del país carecen de espacio para aplicar sus conocimientos de tipo científico, tecnológico o tan siquiera técnico. El estado se ha plegado dócilmente al dogma de la inversión extranjera, y su supuesta “transferencia tecnológica”, como hipotético mecanismo de desarrollo, principalmente porque ello no supone amenaza alguna de competencia para las transnacionales y para aquellos macrogrupos económicos, que son, en últimas, su soporte urbano. Cualquier iniciativa empresarial que involucrara la producción de bienes manufacturados

o máquinas herramientas ha naufragado en el ambiente hostil creado, ex profeso, para la proliferación y expansión de las transnacionales, generalmente norteamericanas, que acumulan en el país para hacer fluir el capital nacional, producto del trabajo de las gentes, hacia sus países de origen.

La desindustrialización casi absoluta del país genera un ejército laboral de reserva desproporcionadamente grande, tanto que su absorción por los grupos económicos y las sucursales de las empresas extranjeras se hace imposible. La economía subterránea de carácter puramente informal surge como el único modo de supervivencia para la enorme porción de la sociedad que no se embarca en actividades ilegales. Esta lumpenización de las masas populares, intrínseca a semejante situación, empezó también a incrementarse y extenderse vertiginosamente. Es así como las grandes ciudades (principalmente Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla) han visto el incremento de los pequeños comercios que funcionan por fuera de la reglamentación, se han atiborrado de vendedores ambulantes (una gran cantidad de ellos está conformada por niños desescolarizados, incluso menores de 7 años), se ha disparado el número de taxis y transportes colectivos (muchos de ellos ilegales), la prostitución (tanto de mujeres adultas, como de homosexuales y menores) la mendicidad y la delincuencia callejera han llegado a tomar por completo sus zonas céntricas, las barriadas populares se han llenado de pandillas juveniles asociadas al sicariato (siendo éstas las proveedoras de asesinos a sueldo de narcotraficantes), etc. Todo ello con la aportación, creciente en el tiempo, de familias desplazadas desde el campo.

4. Agudización de las contradicciones rurales: surgimiento de la guerrilla

Tras ser sofocada la acéfala insurrección popular que siguió al asesinato de Gaitán, se empezó una cruenta persecución de los simpatizantes del partido liberal en las zonas rurales, en las que las famosas bandas de “pájaros” o “chulavitas” (paramilitares conservadores), en compañía del tristemente recordado “DAS rural”⁴ masacraban a cuanto infortunado liberal encontraban, por medio de todo tipo de monstruosidades – algunas de ellas famosas

por su barbarie, incluso fuera del país –, aupados por la bendición que su actuar recibía desde los púlpitos de catedrales, parroquias y hasta de las más remotas capillas. La aparición de grupos de resistencia entre los campesinos liberales – abandonados a su suerte por los líderes de su partido tras la desaparición del “incómodo” Gaitán, dado que no tardaron mucho en negociar con los conservadores, tras la salida vergonzante de Laureano Gómez⁵ de la presidencia – dio inicio al oscuro periodo conocido como “La Violencia”.

La guerra sin cuartel de los campos era seguida con frivolidad por los políticos **citadinos** y llevada con suma crueldad por los ejércitos privados de los terratenientes, conservadores innatos. La fiera resistencia de las guerrillas liberales obligó al gobierno militar del general golpista Rojas Pinilla a realizar un remedo de diálogo, basado en vender a las guerrillas liberales la idea de que la hegemonía conservadora había sido derrocada; éste condujo a las negociaciones para el armisticio con el grupo del mítico guerrillero llanero Guadalupe Salcedo, asesinado poco después del abandono de las armas por parte de un mercenario conservador. Esto pareció servir de escarmiento a las otras guerrillas liberales aún activas, que se negaron a desmovilizarse, y, por el contrario, comenzaron a conformarse como ejércitos más o menos organizados, con un mando unificado y en el proceso de presentarse a sí mismos ante el país como una alternativa de poder a escala nacional. Es así como la guerrilla del Líbano (departamento del Tolima), entre otras, avanza hacia la puja por el control territorial con el estado. En el año de 1964, en un ejercicio de osadía sustentada por un grado de estructuración creciente, se lanza el reto al estado en forma de la proclamación

⁴ Sección del Departamento Administrativo de Seguridad destinada a la inteligencia en el campo y las regiones apartadas.

⁵ Uno de los personajes más nefastos de la historia colombiana, cuyos escritos manifiestan abierta simpatía por las ideas fascistas de su época. Era “optimista” respecto a su hipótesis sobre lo inevitable de la desaparición, tan deseada por él, de grupos marginales como indígenas y negritudes. Después de su caída y tras un breve periodo de caos político, sobreviene el golpe de estado del general Rojas Pinilla en 1954, dando paso a una breve dictadura, de 1953 a 1957. Tras su caída, en el país se instauró el “Frente Nacional”, un régimen de repartición del poder entre liberales y conservadores, quedando establecido un sistema en el que la presidencia se turnaría entre los dos partidos de un periodo al siguiente. Bajo este modelo la corrupción se elevó a niveles escandalosos, ya que no existió oposición real excepto por la populista ANAPO, que reunía a parte de las bases que apoyaban a Rojas Pinilla.

de la “República de Marquetalia”, que abarcaba una gran parte de la superficie de los departamentos del Tolima y Huila. El presidente de entonces, el conservador Guillermo León Valencia, tomó el asunto en forma casi personal y se concentró en el aplastamiento de la naciente “república” con la ayuda del gobierno norteamericano, por medio de la táctica de “tierra arrasada” (a través de una ofensiva de infantería que pretendía ser definitiva) sumada a bombardeos indiscriminados desde el aire, entre los que probablemente se encontrarán armas biológicas como cepas de la viruela negra. La única salida para las guerrillas fue la de volver a las selvas y las montañas: nacían las FARC. Pronto llegarían los coqueteos de la Unión Soviética, su acercamiento, nunca completamente consumado, con el semilegal Partido Comunista Colombiano, y la adopción de un discurso de acento marxista, con características particulares. Se percibía un marcado énfasis campesino, dados sus orígenes, y una fuerte subordinación de lo político e ideológico a lo militar, quizá como un mecanismo para mantener el mando y la supremacía jerárquica de los primeros militantes sobre los ideólogos llegados desde las ciudades (principalmente académicos y sindicalistas con formación política e ideológica marxista, algunos no del todo integrados en la estructura de la organización). Todo esto, siempre, bajo la supervisión de los dirigentes históricos, forjados desde la temprana adolescencia en el combate, como es el caso del legendario Tirofijo. El Partido Comunista se vio en la disyuntiva de ser absorbido por las FARC al pasar completamente a la clandestinidad o conservar un pie en la política legal, manteniendo así su razón de ser y su hecho diferencial, como representante de las capas medias de izquierda, intelectuales con inclinaciones revolucionarias y sindicalistas radicales. Esto nunca se terminó de resolver y los líderes del partido permanecieron en la legalidad, lo que trajo tremendos costos de seguridad para ellos y los demás miembros del partido, muchos de los cuales terminaron asesinados selectivamente por sicarios, militares o civiles, a sueldo del terrorismo de estado.

El agitado ambiente político a escala nacional y mundial de finales de la década de 1960, produjo la aparición de multitud de grupos políticos de izquierda con diferentes tendencias ideológicas. Muchos de estos se incorporaron a la lucha armada revolucionaria desde sus diversas perspectivas y enfoques. Algunos de ellos partían desde la intelectualidad académica, con un enfoque socialista bajo

interpretaciones autóctonas diversas: tal es el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN), influenciado principalmente por la revolución cubana pero con aportaciones de la Teología de la Liberación, entre otras; su cohesión ideológica y de mando nunca fue muy fuerte, presentándose, en diversas ocasiones, profundas contradicciones entre sus diferentes frentes. Otros siguieron el modelo chino de la época, “pensamiento Mao” como sucedió con el Partido Comunista de Colombia, Marxista-Leninista y su brazo armado, el EPL (que era la denominación asignada por el estado y los medios de comunicación del establecimiento). El Quintín Lame, por su parte, surge como la continuación de la resistencia armada del dirigente indígena del que tomaron el nombre, siendo la única guerrilla indigenista de Colombia. El M-19 nace, plagado de eclecticismo y populismo, como una corriente nacionalista antioligárquica, tras el fraude en las elecciones presidenciales de 1970⁶. Esta década pasó entre los gobiernos relativamente débiles de Misael Pastrana y Alfonso López, un elevado grado de represión estatal y grandes movilizaciones populares y actividad de grupos de izquierda en las ciudades, influenciados por las guerrillas o por alguna de las ideologías de izquierda en auge, particularmente fuertes y diversas dentro del vigoroso movimiento estudiantil de la época.

Durante el conflicto ruso-chino, las FARC enfrentaron abiertamente al EPL, aniquilándolo en algunas zonas. Posteriormente se supo de enfrentamientos entre las FARC y el ELN por el control territorial, de los que ha surgido una acción conjunta con un mando evidentemente asimétrico. Algunas facciones del ELN se mantuvieron distantes de su comando central, como el caso del frente Domingo Laín, mientras que otras, más recientemente, se han escindido tomando el nombre de “Ejército Revolucionario Guevarista”. Un moribundo EPL se desmovilizó en el gobierno de Belisario Betancur (1982–1986), habiendo renunciado a todos sus planteamientos iniciales. El suceso más publicitado por los medios de comuni-

cación y el estado fue el de los llamados “acuerdos de paz” con el M-19 – tras su toma del Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema, en pleno centro de Bogotá – entre cuyas consecuencias está la reforma constitucional de 1991, de la que este grupo fue actor fundamental si bien no sobrevivió mucho tiempo después del proceso constituyente. La constitución que surgió de este proceso no representó un cambio sustancial en las relaciones de poder en el país; escasamente se añadió la figura de la Corte Constitucional (que supuestamente vela por el ajuste de las leyes expedidas por el congreso al “espíritu” de la constitución) y la implantación de la “acción de tutela” (mecanismo de amparo de derechos fundamentales, también bajo supervisión de la Corte Constitucional): ambas están en vía de desaparecer a través de su trivialización en el periodo actual. Posteriormente, durante la campaña presidencial de 1996, el líder y candidato presidencial del M-19, Carlos Pizarro, fue asesinado.

La caída del bloque Soviético ha introducido o afianzado más elementos diversos en el discurso de las guerrillas activas, algunos de ellos de reivindicación campesina, como la reforma agraria, otros abiertamente premarxistas, como la “justicia social” (en su indefinición), otros de corte nacionalista, como la “independencia” frente a EEUU – principalmente económica – o de correcta distribución de las regalías de la extracción de los hidrocarburos. La coherencia ideológica ha dado paso a “reivindicaciones concretas” que buscan, de alguna manera, llevar la guerra al terreno político frente al pueblo, de forma más o menos errática.

5. Paramilitarización del estado; narcotización de la guerra y la sociedad

Uno de los fenómenos más dramáticos de la historia reciente de Colombia es la paulatina transformación de la clase terrateniente hacia su versión más rabiosa y devastadora. Desde finales de los años setenta se venía instrumentando la reaparición de los grupos paramilitares como ejércitos privados, destinados a proteger a los hacendados de los secuestros o amenazas (casi siempre extorsivas, a manera de “impuesto revolucionario”) por parte de las guerrillas, si bien, la ligazón de la clase terrateniente con la institu-

⁶ En estas elecciones, Rojas Pinilla ve como el consejo electoral controlado por el Frente Nacional cambia repentinamente y de forma muy sospechosa el resultado de los escrutinios entre la noche del domingo electoral y la mañana del lunes siguiente. El favorecido, tras una victoria segura de Rojas según los primeros conteos, es el candidato de dicha alianza, el conservador Misael Pastrana, último presidente del Frente y padre de Andrés Pastrana, a su vez presidente del país 1998 y 2002.

cionalidad impedía a algunos de sus miembros lanzarse abiertamente a la lucha contrainsurgente directa.

Tal situación cambió radicalmente con la aparición de factores nuevos en la situación de las provincias en Colombia. Nuevas generaciones de terratenientes, herederas de los anteriores, radicalizaron sus posiciones ante la incapacidad de las fuerzas regulares, a su servicio, de garantizar en las regiones sus privilegios heredados, como había sucedido en generaciones pasadas. Dicha radicalización se sumó al auge repentino del lucrativo negocio del narcotráfico hacia finales de la década de 1970, el cual presionó con tanta fuerza al ámbito rural del país que hizo saltar por los aires a buena parte del rompecabezas de latifundios que constituye el campo colombiano, sufriendo así una profunda reestructuración. Muchos terratenientes emergentes, boyantes de dinero por la enorme rentabilidad del tráfico ilegal de narcóticos, empezaron a adquirir aceleradamente haciendas, fincas, parcelas, lotes, etc. Los métodos empleados para su adquisición no eran, en la mayoría de los casos, delicados o comedidos con los “vendedores”, pasando casi siempre por la creación del ejército privado de rigor. Éste se encargaba tanto de labores de escolta como de presionar la venta de terrenos de pequeños propietarios, incluso de algunos grandes cuya capacidad de autodefensa, por razones económicas o ideológicas, era menor. Tal situación se tradujo en una segunda aceleración del desplazamiento interno, superpuesta a la anterior. Algunos de los terratenientes de antaño se involucraron de lleno en el negocio del narcotráfico, haciendo indistinguibles, en muchos de los casos, a terratenientes, narcotraficantes y líderes paramilitares; otros se convirtieron en simpatizantes; los más tímidos en financiadores (casi siempre voluntarios).

Se trascendió, entonces, de la simple defensa de privilegios a la apertura de una guerra contrainsurgente irregular, con la ayuda decidida de altos mandos del ejército (que proveían, y proveen, armas, munición y, sobre todo, entrenamiento, como viene sucediendo en los batallones del Magdalena Medio, con la asesoría de mercenarios reconocidos como el israelí Jair Klein) y con la connivencia de las altas esferas del estado, que pretendía así deshacerse de la responsabilidad internacional por el constante ejercicio del terrorismo de estado, pues

éste había llegado a extremos inauditos durante el gobierno de Turbay Ayala⁷ (1978–1982). Pocos años después el actual presidente del país, Álvaro Uribe, como gobernador de Antioquia de entonces, intentó por primera vez conseguir la legalización e institucionalización del paramilitarismo, a través de la creación de “agencias de seguridad privada rural”, denominadas con el repulsivamente paradójico mote de “Convivir”: la versión privada del “DAS rural” de otros tiempos. En años subsiguientes se multiplicaron los asesinatos de cientos de líderes campesinos, indígenas, estudiantiles, millares de sindicalistas y académicos connotados (como el caso del respetado profesor de derecho Eduardo Umaña Mendoza, cuya muerte trastornó a la comunidad universitaria colombiana), candidatos presidenciales (el mencionado Carlos Pizarro, entre otros). También fue el periodo de la aniquilación del primer intento de pasar a la legalidad por parte de las FARC a través de su indirecta participación en el frente político de izquierda conocido como Unión Patriótica (UP)⁸. Dos de sus candidatos presidenciales fueron asesinados (Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo) y sus afiliados fueron sistemáticamente eliminados allí donde se dieran a conocer, tanto que cabe perfectamente la expresión “caían como moscas”. Más de 3000 militantes de la UP fueron asesinados en menos de dos años, lo que llevó a las FARC a descartar cualquier idea de de pasar a la legalidad.

Pero, sin duda, la expresión más ignominiosa de esta política de barbarie fue la adopción por parte del paramilitarismo de la eliminación de la supuesta “base social” de las guerrillas en el campo. Esto se ha llevado a cabo a través de la generalización de un terror innombrable, mediante la masacre de multitudes, asesinando familias completas, arrasando pueblos enteros, usando en semejante labor armas brutales como martillos y cinceles, machetes y sierras eléctricas. El caso de Mapiripán (Meta)⁹ es una tragedia para la humanidad: entre el 5 y el 10 de julio de 1997, todos los habitantes del caserío, por lo menos 49 personas (según datos del propio gobierno), fueron asesinados con motosierras en su plaza central... uno tras otro,

⁷ Famosas son las desapariciones forzadas y las torturas y ejecuciones sumarias, llevadas a cabo durante el gobierno de Turbay en el tristemente célebre Batallón de Caballería del ejército colombiano.

⁸ Resultado de los diálogos de esta guerrilla con el gobierno de Betancur.

hombres y mujeres, niños y ancianos, en una carnicería humana abominable... todo oculto bajo el velo de un silencio cómplice de la clase política y de los medios de comunicación que se extiende hasta ahora. Pocos mandos medios del ejército han sido llamados (por “supuesta omisión” al hacer la vista gorda al paso a los paramilitares que se dirigían al pueblo) a una inútil corte marcial experta, como todas, en justificar y exonerar a casi todos los militares que por ella pasaron (condenando sólo a unos pocos a penas irrisorias, a manera de chivos expiatorios), y reunida tan sólo tras una fuerte presión de organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos a través de los gobiernos de sus países.

Álvaro Uribe, elegido presidente en marzo de 2002, es un representante neto de lo más rancio de la clase terrateniente¹⁰ y es parte de la más agresiva avanzada política de dicha clase, de la ultraderecha colombiana en general y del paramilitarismo. Ha sido amigo personal y vecino de hacienda (en Córdoba) de algunos de los fundadores de las AUC (la variopinta agrupación de los diversos grupos paramilitares de Colombia); es hijo de un narcotraficante pedido en extradición por EEUU (el ya fallecido Alberto Uribe Sierra¹¹). Fue aliado político de Pablo Escobar durante su fugaz paso por la política (programa “Medellín sin Tugurios”), cuando Uribe era gobernador de Antioquia y figura en una lista desclasificada del Departamento de Defensa de EEUU¹² como empleado del mismo. Fue, además, director de la autoridad aeronáutica civil del país en las épocas de proliferación de licencias a pilotos de monomotores privados al servicio de los narcotraficantes, que hacían incursiones al Caribe y Centroamérica. Sin embargo, curio-

samente, se presenta a sí mismo como un adalid en la lucha antinarcóticos abanderada por EEUU, a pesar de que dentro de su programa de gobierno figura la “desmovilización” de los paramilitares. Tal “desmovilización”, según lo visto y oído en Santafé de Ralito (lugar de los “diálogos” –léase monólogos – con las AUC), no es más que una legalización directa del paramilitarismo y de las propiedades que sus comandantes han adquirido mediante la intimidación y el desplazamiento forzoso, además del inmenso lavado de capitales que significaría la legalización implícita de las fortunas, adquiridas o engrosadas, como consecuencia de sus negocios en el narcotráfico. Aparte de lo anterior, el éxito del proceso les eximiría de rendir cuentas por este delito y, de paso, evitar ser extraditados a EEUU, además de escapar a los procesos por los innumerables crímenes de lesa humanidad que han cometido desde su creación.

6. Perspectivas de evolución

Uno de los factores que más contribuye al éxito político de Uribe, y a su campaña de concentración de poder de corte fascista, es la unidad de las diversas facciones de la oligarquía colombiana que ha logrado en torno suyo. Los políticos adscritos a los gamonales de las regiones han ido perdiendo la fidelidad a los partidos tradicionales. El partido conservador se ha comprimido a su mínima expresión, si bien se ha convertido en pieza clave para el enorme pero irregular y caprichoso poder uribista en el congreso. Ello lo ha llevado a refugiarse en un apoyo irrestricto a Uribe a cambio de las cuotas burocráticas que le permiten subsistir como engranaje clientelista y al apoyo que da al gobierno para garantizarle una mayoría parlamentaria suficiente que permita la gobernabilidad del estado. Los liberales se han atomizado, siendo recogidos muchos de ellos por el uribismo, en especial las facciones de derechas (como el grupo de Vargas Lleras o del ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa) y las más volátiles ideológicamente, proclives a dar

⁹ Ver <http://www.cejil.org/comunicados.cfm?id=621>

¹⁰ Es dueño de enormes haciendas en Antioquia y Córdoba como El Ubérrimo y, anteriormente, La Mundial. En esta última, la familia Uribe Vélez tuvo un problema legal con campesinos de la zona, a los que se les pagó una deuda de cesantías a través de la cesión temporal de la administración de la finca [ver <http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/uribe3.html>]; cuando Uribe consideró que la finca debía ser devuelta, varios campesinos del sindicato fueron asesinados o desaparecidos para forzar el desalojo. En investigaciones judiciales sobre acciones paramilitares posteriores, el hermano del presidente, Santiago Uribe, había sido incluido en la causa penal por creación de grupos paramilitares en esa zona, aunque dicha causa contra él ha sido archivada, curiosamente, durante este gobierno

¹¹ “*Los Jinetes de la Cocaína*” de Fabio Castillo. Editorial Documentos Periodísticos, 1987. Capítulo III “Nacen las familias”.

¹² Documento elaborado en septiembre de 2001 por informantes del Departamento de Defensa de EEUU en el que figuran varias figuras de la vida política y social colombiana, al lado de conocidos narcotraficantes y sicarios a sueldo de los mismos. Fue puesto a la luz pública, tras el retiro de su carácter secreto, por el periodista Joseph Contreras de la revista norteamericana Newsweek en el año 2004 [Ver <http://www.sodepaz.net/modules.php?name=News&file=article&sid=2165>].

su apoyo al que mejor pague sus votos. El empeño de instaurar un modelo aún más autoritario, que permita perpetuar la insostenible campaña militar contrainsurgente, se ha ganado el apoyo de los terratenientes, en armas o no, de los grandes grupos económicos (cuyos capitales están en proceso de huida del país mediante la venta de sus empresas, incluso las de los grandes grupos horizontales), de los comerciantes y de la mayor parte de lo que queda de la clase media, aquélla alejada de la intelectualidad y contagiada de arribismo. Estos son, de hecho, los principales componentes del electorado colombiano y fueron los mismos que eligieron a Uribe en 2002 en primera vuelta, con un 53% de los votos contabilizados pero con una abstención que superó el 54%. Es notorio que las masas populares han adoptado el abstencionismo como silencioso mecanismo de protesta, tanto ante al *stablishment* como ante a las organizaciones enfrentadas al mismo, de las que se encuentran profundamente distanciadas (salvo contadas excepciones de coyuntura).

La estrategia de las FARC frente al fortalecimiento de un paramilitarismo casado con el narcotráfico – aupado por las fuerzas armadas estatales y en busca de aceptación social de las clases altas y medias altas urbanas – ha sido la de disputarse el control de las zonas de producción de cultivos ilegales, por medio de una tolerancia creciente a dichos cultivos y a los “empresarios” que los fomentan, actuando como cobrador de impuestos a la producción y al comercio. En algunos casos, la propaganda del ejército habla de protección de los cultivos por parte de la guerrilla, especialmente de las FARC, a lo que el sentido común podría dar cierta credibilidad (para algo pagarán impuestos en aquéllas regiones los productores de cocaína). Los militares más recalcitrantes, los miembros más fanáticos del ultraderechista gobierno actual de Uribe y las agencias antinarcóticos norteamericanas (que operan en el país como en cualquier estado de EEUU) aseguran que las guerrillas activas (ahí no hacen distinción) se encargan ahora del cultivo mismo, de la producción de los narcóticos procesados y de su comercio con mafias de los países desarrollados, a cambio de armas. Sobre esto no hay indicios ciertos excepto dicha propaganda.

Aun así, más complejo es tratar de comprender esta perspectiva política a largo plazo: el análisis que

lleva a las FARC a coexistir con las mafias narcotraficantes podría basarse en el argumento de que negarse a competir por dichas zonas sería, prácticamente, entregar al enemigo una fuente estratégica de recursos para la consecución de arsenal, material de intendencia y bases de apoyo; ello también podría suponer una importante cesión territorial al paramilitarismo, aliado natural de los narcotraficantes pues, en gran medida, está constituido por estos. Sin embargo, tal razonamiento podría mostrarse como apresurado (¿pragmatismo?), producto de una concepción militarista, pues los costes políticos de seguir adelante con este enfoque, a largo plazo, podrían ser mucho más grandes que los beneficios. De hecho, si bien se puede asegurar que el fracaso de la llamada “Política de Seguridad Democrática” de Uribe está refrendado por un accionar cada vez más intenso y contundente de las FARC¹³, no se puede decir lo mismo de la lucha política frente a la gente, ante la que es difícil sustentar, por ejemplo, un discurso de reforma agraria mientras se tolera el monocultivo (en este caso, de plantas alucinógenas) bajo la égida de mafiosos oportunistas y en detrimento de cultivadores y recolectores (llamados “raspachines”). El ELN por su parte se ha tratado de mantener al margen de este fenómeno, ha perdido influencia en los sectores académicos y populares, ha sido aislado y ha visto cómo sus frentes desaparecen de sus antiguas zonas de influencia, tales como las barriadas pobres de Medellín, de donde está siendo desplazado por la ofensiva de los sicarios jóvenes bajo el mando de reconocidos líderes narcoparamilitares entre los que destaca “Don Berna”¹⁴, así como de zonas rurales, como en el sur de Bolívar, por parte del llamado “Bloque Central Bolívar” de las AUC¹⁵; el ELN también está sufriendo un proceso de disgregación, por la escisión de algunos de sus frentes, como se mencionó anteriormente.

Por si esto fuera poco, la política exterior estadounidense para América Latina tiene a Colombia como bastión fundamental en sus perspectivas de expansión y control político y económico sobre todos los países del área, más aún ante la perspectiva

¹³ Recientes acciones militares de gran envergadura se han producido el último año en los departamentos de Arauca, Putumayo, Cauca y Nariño, además de golpes estratégicos al ejército estatal en la región del Urabá, departamentos de Chocó y Antioquia.

¹⁴ Conocido narcotraficante y ahora paramilitar, controla el sector de las “Comunas Nororientales” de Medellín (distritos más pobres

que el giro ideológico a la izquierda que se está produciendo en la región se radicalice por la intervención de Hugo Chávez, el incómodo vecino de Uribe. Esto garantiza a las clases dominantes colombianas, y más desde la promulgación del llamado “Plan Colombia”, un flujo constante de armamento, instructores militares, comandos de elite, equipo de inteligencia y capitales de libre inversión destinados a la lucha contrainsurgente y a la represión política, bajo la máscara de la trillada “lucha contra las drogas”. Estos últimos permiten a los gobernantes y los altos mandos de las fuerzas de seguridad del estado lucrarse a través de múltiples corruptelas y desvíos de fondos, cosa que es, hasta cierto punto, tolerada por EEUU. A tal extremo llega la intervención de EEUU en los asuntos internos del país que el embajador Woods se permitió el lujo de apoyar, en 2004, el trámite de la reciente reforma constitucional que permitirá la reelección de Uribe (prácticamente garantizada por el ambiente político creado por políticos, empresarios y periodistas en torno a su figura).

Semejante panorama deja pocas esperanzas para una evolución de la guerra favorable al pueblo colombiano. Sus organizaciones de base son prácticamente inexistentes, las pocas que existen se encuentran debilitadas por la represión estatal¹⁶ y las presiones y amenazas de paramilitares e incluso, en algunas ocasiones, de las propias guerrillas, buscando cada facción el acallar a las organizaciones y agremiaciones que no pueden convertir en instrumento de sus propias agendas. En medio de esas mareas gravitatorias, toda iniciativa popular independiente, de cualquier tipo, nace condenada a la pronta desaparición, por la coacción o la exterminación física. Organizaciones populares de la actualidad, como las llamadas Comunidades de Paz (que se declaran neutrales ante cualquier grupo armado, incluyendo al propio estado)¹⁷, las asocia-

y marginados de la ciudad), además del negocio del transporte público, a través del “Bloque Cacique Nutibara”. Llevó a cabo la eliminación del otro grupo paramilitar de Medellín, conocido como “Bloque Metro”, cuyo jefe, alias “Doble Cero”, fue asesinado poco después en Santa Marta.

¹⁵ Este bloque es aliado de los narcotraficantes de la región del sur del departamento de Bolívar (costa Caribe) y está interesado en ampliar sus propiedades en una zona de producción aurífera. También es conocido por las numerosas masacres ejecutadas en los municipios de San Jacinto y en la zona rural de los Montes de María. [Ver http://www.dhcolombia.info/article.php3?id_article=81]

¹⁶ Un caso que produjo revuelo fue el asesinato de varios líderes

de mujeres víctimas de la guerra (generalmente viudas de hombres masacrados por los paramilitares), las organizaciones indígenas (como las agremiaciones de cabildos del Cauca), las agremiaciones campesinas, etc., se ven sometidas a los diferentes mecanismos de terrorismo de estado ejercidos por el gobierno actual, comenzando por el señalamiento y la criminalización que sobre ellos se hace por parte del propio presidente, el vicepresidente y los ministros.

La clase obrera se encuentra dispersa, desorganizada y sumida en el escepticismo; sus famélicas expresiones políticas son canalizadas a través de los debilitados sindicatos¹⁸ y de los nuevos, inconsistentes y volátiles partidos de corte socialdemócrata que surgieron tras la constitución del 91, como el Polo Democrático Independiente (heredero del M-19) y Alternativa Democrática, los que a su vez están aislados y vapuleados por un diluvio constante de desprestigio por parte de los medios masivos de información, controlados casi totalmente por los grupos económicos y ahora por trasnacionales como el Grupo Prisa, embarcados en la campaña política por la reelección de Uribe. La intelectualidad del país se encuentra en “estado de coma” y los escasos intentos de ejercer la crítica y la denuncia social terminan en el asesinato selectivo o el exilio forzoso, mientras las instituciones universitarias de carácter público son víctimas, al igual que la oposición, del señalamiento y del descrédito por los mismos medios de comunicación, mientras las piezas del gobierno en su interior intentan desnatu-

sindicales del departamento de Arauca, muertos por tiros de gracia por parte del ejército, cuyos comandantes en la región intentaron después disfrazar la ejecución sumaria poniéndoles armas en las manos y acusándolos de pertenecer al ELN y de haber sostenido un tiroteo con los militares. El ministro de defensa de la época y el vicepresidente Francisco Santos se empeñaron en afirmar que se trataba de guerrilleros caídos en combate, además de intentar obstruir las investigaciones de la Fiscalía. Pruebas de balística y el testimonio de los sobrevivientes (trasladados en helicóptero a la base militar y amenazados varias veces durante el trayecto y su posterior permanencia en la base) demostraron que se trató de una ejecución extrajudicial.

¹⁷ Los líderes de estas comunidades están sufriendo actualmente un proceso de exterminio por parte de la alianza entre el ejército y los paramilitares, como es el caso de la Comunidad de San José de Urabá (Antioquia), en la que dos familias enteras, incluso niños de 2 y 4 años, fueron salvajemente asesinados a palos.

¹⁸ El más fuerte, la Unión Sindical Obrera – agremiación de trabajadores de la empresa estatal de petróleo, ECOPETROL – ha visto morir a decenas de sus militantes y directivos a manos de sicarios, y es constantemente acosado por el sistema jurídico del país, particularmente durante sus huelgas

ralizar su carácter público y su esencia crítica mediante abruptas y torpes reformas académicas.

Aciago panorama para un pueblo que deberá mirarse a sí mismo y pasar del escepticismo (reflejado en la apatía, el individualismo y hasta en el abstencionismo electoral, por positivo que parezca en principio) a la organización política de las clases y los sectores oprimidos, para así conseguir un mínimo grado de cohesión que le permita zafarse el yugo que le han impuesto unas elites abusivas, antinacionales y criminales, así como sacudirse del letargo al que ha sido inducido por lo azaroso e irregular de la prolongada guerra. Una guerra que, por ahora, no es la del pueblo colombiano, pero de la cual es la víctima principal.